

FRANK SMYTH
VICTORIA BRITAIN

Ruanda: guerra, dinero, e intervención

Desde abril pasado la guerra en Ruanda ha producido alrededor de medio millón de muertos, un número desconocido de heridos, centenares de miles de desplazados y la destrucción sistemática de poblados, cosechas, animales e infraestructura. Presentamos aquí un informe sobre la venta de armas a este país y un análisis sobre la intervención francesa.

I. El tráfico de armas *Frank Smyth*

El avión que se estrelló el 6 de abril provocando la muerte de los presidentes de Ruanda y Burundi (y que fue tal vez derribado) constituye tan sólo el último acto de violencia acaecido en estos dos países vecinos de África Central. Cerca de 100.000 personas han perdido la vida y más de un millón ha huido ante los ataques producidos en años recientes por motivos étnicos o políticos. Elementos del ejército de Burundi, controlado por los tutsis, asesinaron al anterior presidente, de la etnia hutu, en octubre. De forma parecida, el ejército de Ruanda, controlado por los hutus, es responsable de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos allí acontecidas, de acuerdo con Human Rights Watch/Africa. Por si fuera poco, en Ruanda una de cada ocho personas se encuentra al borde de la inanición, de acuerdo con lo afirmado en un nuevo informe elaborado por las agencias de ayuda humanitaria, entre las que se cuenta Oxfam.

El renovado terror de Ruanda se precipitó cuando ésta se encaminaba provisionalmente hacia un acuerdo de paz tras una guerra civil de tres años, concluida en agosto pasado. El conflicto se vio alimentado por los gobiernos de terceros países proveedores de armas, algo en sí característico del modo acelerado en que se inunda de armamento a los países subdesarrollados desde el final de la Guerra Fría.

En octubre de 1990, las guerrillas del Frente Patriótico Ruanda (FPR), en un intento de derrocar al Gobierno del Presidente Juvenal Habyarimana, invadieron el país por su frontera septentrional con Uganda. De lugares de todo el mundo llega-

Frank Smyth es autor de Arming Rwanda: The Arms Trade and Human Rights Abuses in the Rwandan War, del Arms Project de Human Rights Watch, Nueva York. En esta investigación participó el especialista en armamento Michael J. Limatola. Este artículo, aparecido en The Nation en junio de 1994, está dedicado a sus informantes ruandeses, la mayor parte de los cuales figuran a estas alturas entre los muertos o desaparecidos. Reproducido con autorización del autor. Traducción: Pablo Carbajosa.

ba un flujo regular de armas, incluyendo Kalashnikov AKM (AK-47), fusiles de asalto, morteros de largo alcance de 120 milímetros, obuses de 122 milímetros y lanzacohetes múltiples Katyusha de fabricación soviética, con capacidad para cubrir de metralla una superficie de mayor anchura y longitud que la de un campo de fútbol. Miles de personas perdieron la vida, tanto combatientes como civiles, y un millón se vio desarraigado de sus hogares. "Tengo la convicción de que todo el mundo desea introducirse en este tipo de mercado", afirmó James Gasana, ministro de Defensa de Ruanda durante el pasado año, añadiendo que la mayoría de los países y de los traficantes independientes que suministraban las armas estaban menos interesados en saber quién pudiera ganar la guerra que en lograr beneficios gracias a ella.

Las fuerzas del Gobierno se componen principalmente de hutus; las guerrillas, de tutsis. El conflicto entre ambas etnias se remonta al siglo XVII, cuando se estableció el reino de Ruanda como un estado altamente organizado y estratificado. La mayoría de los nobles, comandantes militares, funcionarios locales y criadores de ganado eran tutsis, que hoy constituyen cerca del 14% de la población; el resto lo componían los hutus, que eran y siguen siendo predominantemente campesinos en régimen de subsistencia. Sus diferencias no son tribales, sino étnicas y sociales, considerándose los tutsis históricamente superiores.

La monarquía tutsi dominó Ruanda hasta que fue derrocada por los hutus en 1961, un año antes de la independencia de la tutela de Bélgica, que al correr de los años se había aliado con los tutsis, para cambiar de bando a fines de los 50. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno consistió en ejecutar a cerca de 20 prominentes dirigentes tutsis; las masas hutus llegaron a asesinar hasta 20.000 ciudadanos tutsis. Hacia 1964, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimaba que cerca de 150.000 tutsis ruandeses habían huido a Tanzania, Burundi, Zaire y Uganda. Veinticinco años más tarde, estas gentes y sus descendientes, denominados *banyarwanda*, se habían multiplicado hasta alcanzar una cifra cercana a las 500.000 personas. La mayoría de ellas carece de ciudadanía o de residencia legal en aquellos países a los que ha huido, lo que les hace vulnerables a la deportación y los desplazamientos a otros lugares así como a cualquier clase de hostigamiento.

La represión de Habyarimana

En 1973, el ministro de Defensa, Habyarimana, de la etnia hutu, tomó el poder. Prometió conducirse justamente tanto con los hutus como con los tutsis, en lugar de lo cual distribuyó la mayor parte de los recursos y puestos clave a sus familiares, amigos y asociados de su región natal, situada al noroeste de Ruanda. Hasta muy recientemente, Habyarimana gobernaba el país como un Estado de partido único, y la mayoría de los ministros del Gobierno guardaban algún tipo de parentesco con él, bien por nacimiento, bien por matrimonio. Después de la invasión de las guerrillas, el régimen de Habyarimana distribuyó al menos 500 rifles de asalto Kalashnikov entre a las autoridades municipales, trabajando en colaboración con la milicia del partido en el poder. Con funcionarios del Gobierno al mando, esas milicias organizaron turbas de enfervorizados hutus que marcharon

a las aldeas y campos en busca de tutsis. Robaron judías y sacrificaron a las cabras y al ganado. Se dividieron la carne junto con la ropa antes de prender fuego a numerosas chozas de bambú. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas a machetazos. El régimen de Habyarimana detuvo arbitrariamente al menos a otras 8.000. Cientos de personas fueron golpeadas, violadas y torturadas. También las guerrillas cometieron abusos, ejecutando a cientos de civiles sospechosos de colaborar con el régimen de Habyarimana, así como a soldados prisioneros. Trastornaron con su violencia la vida de otros cientos, si no de miles, y obligaron a un número indeterminado de civiles a convertirse en mano de obra esclava como porteadores de sus tropas. Aunque las violaciones de ambas partes fueron documentadas por una comisión internacional que incluía a Human Rights Watch y a tres organizaciones francófonas, tanto el Gobierno como las guerrillas las niegan.

La mayoría de los países y proveedores que han facilitado la carnicería de Ruanda tienen la boca cerrada de un modo parecido. Los rusos, al igual que otros países, antiguos miembros del Pacto de Varsovia se han convertido hoy en día en prolíficos suministradores de armas ligeras. La desaparición de los controles centrales de Moscú ha dejado las manos libres a los gobiernos y funcionarios a cargo de los arsenales existentes. Puesto que estas armas han sido ya pagadas, pueden diseminarse por el mercado mundial a precios por debajo de su coste. Dado que el rublo ruso pierde su valor, y las naciones de Europa Oriental se encuentran necesitadas de divisas fuertes, es fácil presumir que sus gobiernos vayan a vender todavía más armas en años venideros. Ya no se ven constreñidos por los límites que establecía la lealtad a las superpotencias; la única cosa que importa es el dinero contante y sonante.

Aunque se desconocen las cifras exactas, los fusiles Kalashnikov han estado anegando mercados y guerras a lo largo y ancho de África y Asia. En fecha tan reciente como marzo de 1992, las partes beligerantes de África Central podían conseguirlos en grandes cantidades a un precio de 220 dólares la unidad; desde entonces, los precios han caído por debajo de los 200 dólares. En países como Ruanda, los Kalashnikov eran en tiempos más corrientes que los automóviles; ahora son más fáciles de encontrar que las bicicletas. Cerca del 80% de las armas utilizadas por las guerrillas del FPR eran Kalashnikov, muchos de ellos de fabricación rumana. Entre los combatientes que disponían de uniforme, la mayoría vestía camuflaje impermeable mimetizado, procedente de la antigua Alemania del Este; también se pueden conseguir ahora por medio de catálogos comerciales militares. Los traficantes de armas africanos que viven en Bruselas parecen haber facilitado el transporte de material del Pacto de Varsovia a África Oriental. La tendencia es global y no se limita a las armas o el camuflaje: en 1992, la DEA (Drug Enforcement Administration) norteamericana confiscó reactores de carga AH-72 de fabricación soviética que el cártel colombiano de Cali había utilizado para transportar cocaína de contrabando.

En Sudáfrica, la factoría Armscor, de propiedad estatal, ha fabricado durante años armas de alta calidad para sus fuerzas de seguridad y defensa, que no podían adquirir armamento en el extranjero debido al embargo de las Naciones Unidas. Aunque esta resolución tenía carácter vinculante, existía otra, que prevenía

La mayoría de los países y proveedores que han facilitado la carnicería de Ruanda tienen la boca cerrada de un modo parecido. Los rusos, al igual que otros países, antiguos miembros del Pacto de Varsovia se han convertido hoy en día en prolíficos suministradores de armas ligeras.

contra la compra de armas a Sudáfrica, que no lo tenía. Ruanda la ignoró. De acuerdo con los recibos de Armscor con fecha del 19 de octubre de 1992, Sudáfrica vendió a Ruanda armas ligeras, ametralladoras, morteros y munición por valor de un mínimo de 5, 9 millones de dólares. Cerca de 3.000 soldados de las tropas ruandesas están hoy en día equipados con el fusil de asalto R-4, que es superior al Kalashnikov. El destino de Armscor y sus filiales en la nueva Sudáfrica está todavía por determinar, pero es probable que pase por convertirse en empresa privada. El levantamiento del estigma y las sanciones contra el antiguo Estado del *apartheid* proporcionará a Armscor la oportunidad de comercializar sus productos de forma abierta y agresiva por vez primera.

Un contrato de armas firmado el 30 de marzo de 1992 reza del modo siguiente: "El comprador y el proveedor están de acuerdo en no dar a conocer los contenidos de este contrato a terceros". El comprador era Ruanda y el proveedor, Egipto, en una transacción de 6 millones que incluía fusiles Kalashnikov de fabricación egipcia, minas antipersonal, explosivos plásticos, morteros y artillería de largo alcance. Otros documentos indican que la venta fue financiada por "por un banco internacional, de primera categoría, contando con la aprobación de" Egipto. Ruanda pagó un millón de dólares por adelantado y se comprometió a desembolsar otro millón de dólares más a cuenta de los beneficios obtenidos por la venta de 615 millones de dólares de la cosecha de té, además de un millón de dólares anuales durante los próximos cuatro años. El "banco internacional de primera categoría" garantizaba el pago de los 6 millones por parte de Ruanda. Pocos bancos comerciales privados, que operen por motivos de lucro, correrían un riesgo semejante. Hay fuentes, sin embargo, que afirman que el Credit Lyonnais sí lo corrió, aunque los representantes del banco lo han negado posteriormente. Aunque tal vez sea objeto de privatización en un próximo futuro, en marzo de 1992 era todavía parte de la banca francesa nacionalizada. La venta constituyó, de hecho, un crédito secreto de ayuda militar de Francia a Ruanda. Este crédito se ha convertido desde entonces en subsidio. Con lo que no contaban ni el Credit Lyonnais ni Ruanda era con la circunstancia de que las guerrillas del FPR lanzaran una nueva ofensiva en febrero de 1993 y tomaran la plantación de té de Mulindi. El té se echó a perder y nunca llegó a ser cosechado. "Nuestra economía estaba ya achacosa en 1990, y por supuesto, la guerra no ha resuelto nada", afirmó el presidente Habyarimana en octubre pasado. "Ahora queremos mejorar nuestras perspectivas macroeconómicas, pero sufrimos una grave escasez de divisas". Por lo que se refiere a la abultada deuda de Ruanda con Egipto, el Credit Lyonnais y, por extensión, Francia, están obligados a asumir su responsabilidad.

La disposición del Gobierno francés a obrar de este modo, así como a seguir apuntalando militarmente a Habyarimana, proviene de su determinación de mantener su credibilidad en el Africa francófona. Desde la independencia de Ruanda en 1962 hasta el momento en que se produjo el estallido del conflicto, Bélgica actuó como principal socio comercial, aliado político y patrón militar. Pero una vez iniciada la guerra, ese papel fue asumido por Francia. Bélgica resulta única entre los estados miembros de la OTAN por el hecho de que sus leyes prohíben de forma explícita la venta o el suministro de armas a un país en guerra. Poco después de la invasión del FPR de 1990, Bélgica cortó toda ayuda de signo mortífero. Y el

año pasado, tras la publicación del informe sobre derechos humanos de una comisión internacional, Bélgica llamó a consultas a su embajador. Las acusaciones de que Bélgica ha prestado ayuda al FPR son falsas, y provienen del resentimiento que causa en el régimen de Habyarimana la actitud de neutralidad de belga.

Los funcionarios franceses, sin embargo, defienden el historial de derechos humanos del régimen de Habyarimana. "Han muerto civiles como en cualquier otra guerra" es la explicación del agregado militar francés en la capital, Kigali, jefe por ende de la misión de asistencia militar llevada a cabo por Francia. (En un evidente acto de desdén por los periodistas y otros enviados que han puesto en cuestión el papel de Francia, el coronel Cussac se negó a revelarme cuál era su nombre de pila). "¿Está usted afirmando que el suministro de asistencia militar constituye una violación de los derechos humanos?" preguntó, para añadir que los funcionarios de la embajada norteamericana en Kigali apoyaban la política francesa. "Francia y Estados Unidos tienen una historia común: véase, por ejemplo, el caso de Vietnam". En realidad, todos los diplomáticos occidentales no franceses presentes en Ruanda se muestran críticos con el papel desempeñado por Francia.

Humanitarismo sospechoso

Inmediatamente después del estallido de la guerra, Francia desplegó tropas de combate trasladadas desde sus bases situadas en la República Centroafricana, llegando a contabilizarse hasta 300 soldados. Francia se apresuró también a enviar consejeros, piezas para helicópteros, morteros y municiones. Después de que el FPR lanzara su ofensiva en febrero pasado, el número de tropas francesas en Ruanda se incrementó hasta llegar a 680 soldados como mínimo, comprendidos en cuatro compañías, incluyendo paracaidistas. "Las tropas francesas están presentes en Ruanda para proteger a los ciudadanos franceses y de otras nacionalidades" me confió el Coronel Cussac. "Nunca se les ha encomendado misión alguna contra el FPR". Sin embargo, diplomáticos ruandeses, trabajadores humanitarios y oficiales del ejército ruandés confirmaron todos ellos que estas fuerzas habían proporcionado apoyo artillero a contingentes de infantería ruandesa, y que los asesores franceses han sido agregados a los mandos de combate ruandeses. El embajador francés afirmó que la presencia de su país es necesaria para defender a Ruanda de las agresiones de Uganda. Es cierto que Uganda no se ha mantenido total y escrupulosamente al margen durante el conflicto, aunque su Gobierno lo niegue categóricamente. Casi toda Uganda tenía conocimiento en 1990 de la inminente invasión, puesto que los soldados tutsis alistados en el ejército ugandés se despedían abiertamente de sus familias y amigos. Hicieron el viaje, provistos de sus armas y a la vista de las autoridades ugandesas, durante dos días, para reunirse en un estadio de fútbol de Kabale, a unas 200 millas al sur de Kampala, y justo al norte de la frontera ruandesa. Su armamento incluía minas de tierra, lanzagranadas, morteros de 60 milímetros, cañones sin retroceso y lanzacohetes Katyusha. De acuerdo con lo indicado por diplomáticos occidentales, observadores militares internacionales, oficiales del ejército ugandés y testigos oculares que pudieron ver a soldados descargando cajas de fusiles Kalashnikov, Uganda proporcionó de buena gana al FPR más armamento, gasolina, alimentos, baterías y munición a lo largo de la guerra.

Victoria Brittain es analista de política internacional y periodista del diario londinense *The Guardian*. Esta es una versión reducida del artículo más amplio publicado el 24 de junio de 1994 en dicho periódico. Reproducido con autorización de la autora.

"Nos hemos comprometido con el FPR", se jactó un oficial de operaciones del ejército ugandés tras tomarse unas cuantas cervezas en Kampala. "Si no dispusieran de nuestro apoyo, no tendrán tanto éxito como tienen".

Además de los refugiados tutsis que han servido en el ejército ugandés, cerca de 200.000 miembros de esta etnia han estado viviendo en Uganda. Mientras el Presidente Yoweri Museveni trata de reconstruir el país tras la destrucción generalizada que sufrió a manos de Idi Amin, estos refugiados han tenido que disputarse con los ugandeses, a veces violentamente, el agua, la tierra y otros recursos. Al prestar apoyo a las guerrillas, el Presidente Museveni parece menos interesado en reclamar territorios pertenecientes a Ruanda que en facilitar la repatriación de los tutsis. Numerosos altos dirigentes del FPR combatieron también junto a Museveni con la esperanza de que algún día les ayudase a llevar a cabo la invasión de Ruanda.

El FPR y el Presidente Habyarimana firmaron un tratado en agosto pasado, pero su prematura muerte ha provocado la ola más grave de derramamiento de sangre desde la independencia. Horas después de que su avión se estrellara, la Guardia Presidencial del régimen comenzó a señalar como objetivo a oponentes políticos y elementos críticos, sin distinción de etnias. Entre ellos se encontraba la primera ministra en funciones, de la etnia hutu, diez funcionarios belgas en labores de mantenimiento de la paz que trataron de salvarla, muchos sacerdotes y monjas, periodistas y observadores de derechos humanos. Si bien estas víctimas, que pronto se convirtieron en miles, eran principalmente hutus, al igual que el régimen mismo, las milicias del partido gobernante, junto a bandas de soldados y de hombres hutus armados y ebrios asesinaron a decenas de miles de tutsis. Seis días después del inicio de la carnicería, el primero de los cuerpos principales de la guerrilla tutsi del FPR llegó a Kigali.

Aunque Uganda dio refugio y en buena medida armó al FPR, Egipto, Sudáfrica y, en especial, Francia, proporcionaron armas al régimen de Habyarimana, el mayor responsable del reciente derramamiento de sangre. Uganda niega tal extremo, Egipto y Sudáfrica se abstienen de comentarlo, y Francia tiene todavía que revelar del todo en qué ha consistido su papel.

II. Francia: una mala intervención

Victoria Brittain

La intervención francesa en Ruanda, bajo la cobertura de hoja de parra aprobada por las Naciones Unidas, señala el punto más bajo del catastrófico historial presente de las operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo por las Naciones Unidas en África.

No hay país que pueda contribuir menos a la paz en Ruanda que Francia, con sus dilatados antecedentes de apoyo militar y diplomático al régimen del difunto Presidente Juvenal Habyarimana, arquitecto de un despiadado régimen antidemocrático. Francia adiestró a las milicias, al estilo de los *tonton macoute*, de Habyarimana, y envió a sus propias tropas a Ruanda para reforzarlo cuando su régimen se vio por primera vez amenazado por el Frente Popular de Ruanda a finales de 1990.

El despliegue francés, que sus funcionarios presentan cínicamente como humanitario en respuesta a la exigencia pública de que se haga algo, constituye más bien la continuación de la vieja política del Elíseo destinada a impedir que el Frente Patriótico de Ruanda (FPR) alcance el poder. Los franceses estiman correctamente que las consecuencias regionales (en un Zaire inestable, por ejemplo) de un Gobierno preparado y democrático en Ruanda serían explosivas. La población gobernada por el Presidente Mobutu podría llevar a cabo intentonas violentas para derrocarlo.

El secretario general de Naciones Unidas, Butros Gali, ha apoyado contundentemente la intervención francesa, dando pábulo a la falaz idea de que es la única vía factible. La verdad es muy otra: en respuesta a la anterior llamada de Butros Gali solicitando 5.500 soldados más, las naciones africanas que poseen ejércitos bien adiestrados y con experiencia, como los de Zimbabwe y Ghana, estaban dispuestas a aportar nuevos envíos de tropas. (Ghana dispone ya de un contingente considerable sobre el terreno). Cuatro mil soldados africanos adicionales quedaron encomendados para actuar como fuerzas de las Naciones Unidas como resultado de la cumbre de la Organización para la Unidad Africana a principios de este mes. Sólo el fracaso de las naciones occidentales en proporcionar apoyo logístico y financiero les impidió desplazarse de inmediato en apoyo del reducido contingente de las Naciones Unidas en Kigali, al mando del heroico y eficiente general de división Romeo Dallaire. ¿Por qué razón escogieron los franceses, de forma tan ostensible, no seguir esta vía? ¿Y por qué otras naciones, como Gran Bretaña y Estados Unidos, prestaron sólo un tibio apoyo al plan africano. ¿Por qué razón ha apoyado el secretario general de Naciones Unidas a los franceses en una intervención que deja a los soldados africanos francófonos de Dallaire en situación tan apurada como para tener que evacuarlos, y pospone aun por más tiempo la llegada de otras fuerzas africanas para el mantenimiento de la paz?

Butros Gali ha afirmado que la operación francesa sigue el modelo de la intervención humanitaria de los Estados Unidos en Somalia. No podría haber citado peor precedente: Estados Unidos desplazará 38.000 soldados y 10.000 somalíes fueron muertos en cuatro meses de choques con las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas o debido a las luchas entre clanes, de acuerdo con fuentes de la inteligencia norteamericana. Sesenta y ocho “cascos azules” resultaron muertos y otros 262 heridos, mientras la misión se embrollaba pasando de la lucha contra la pobreza a la guerra en toda regla.

Diálogo sabotado

El horror de Somalia se inició porque Butros Gali decidió despedir a un alto funcionario de las Naciones Unidas sumamente respetado en Somalia, Mojamed Sanún, que se había ganado laboriosamente el respeto de todas las partes contendientes en el conflicto, y estaba sentando las bases de un frágil diálogo que todos los observadores exteriores al conflicto consideraban como los comienzos de una posible paz.

En Ruanda, las bases del diálogo entre el FPR y el Gobierno bajo los auspicios de dirigentes regionales como el Presidente Yoweri Museveni de Uganda, el

Presidente Hassan Ali Mwinyi de Tanzania, y el Secretario General de la OUA, Salim Ahmed Salim fueron saboteadas por la decisión del Consejo de Seguridad del 21 de abril de reducir las fuerzas de las Naciones Unidas de 2.700 a 450.

Butros Gali ignoró el día anterior un llamamiento que le invitaba a no dar este paso, cuyas desastrosas consecuencias eran pronosticadas por sus principales valedores. Una segunda oportunidad de diálogo, merced al alto el fuego negociado en la cumbre de la OUA, concluyó con la incomparecencia de la misión prorrogada de las Naciones Unidas.

(...)

Al final, serán los mismos ruandeses los que tengan que ocuparse de sanar las heridas de los horrores que hoy se producen. Hay muchos ruandeses de ambas comunidades étnicas, amén de los pertenecientes al FPR, que, de cesar las masacres gracias a una presión disuasoria efectiva de las Naciones Unidas, podrían empezar a reconstruir su país poco a poco. La iniciativa francesa aleja en el futuro aún más ese día. La decisión francesa de llevar a cabo una acción unilateral (aunque Egipto manifestara la pasada noche su predisposición a agregarse a ella) proviene del legado de un pasado en el que los europeos y sus aliados indígenas –de los que es heredero Butros Gali– administraban África a su conveniencia y en el que la encaminaron hacia el declive económico que ha culminado en los últimos 15 años de una pobreza cada vez mayor.

El profesor Colin Leys escribió recientemente: "Lo que todavía tiene que penetrar en las conciencias de la mayoría de la gente es que...lo que está sucediendo en África constituye un declinar quizás irreversible hacia esa barbarie de origen capitalista contra la que nos previno Rosa Luxemburgo, y que está engullendo gradualmente a la mayor parte del subcontinente". El apoyo de Occidente a dictadores africanos como Habyarimana, Mobutu, Siad Barre de Somalia, Samuel Doe de Liberia, Hastings Banda de Malawi, Felix Houphouet Boigny de Costa de Marfil y demás ha alentado una política toscamente étnica, y ha contribuido a aplastar a esa sociedad civil democrática y cultivada que constituye la única base para un futuro digno.